

Política social y desastres naturales

Desastres naturales como los terremotos, los huacos o las sequías causan estragos en la vida de muchas personas. Igual que las enfermedades y que la pérdida abrupta de ingresos debido a que quien trae el pan al hogar lo ha abandonado o ha muerto, los sufrimientos familiares ocasionados por los desastres se refieren a la economía familiar pero también a los estudios, a la salud, a las redes sociales de soporte y, muchas veces, a la propia composición de la familia, pues exigen la reubicación de algunos de sus miembros.

Los desastres naturales tienen muchos parecidos con la pobreza extrema: miles de peruanos viven todos los días con carencias similares a las que hoy atraviesan los pueblos del sur chico y Huancavelica.

Los desastres naturales llevan a muchas personas a una situación de necesidad urgente, en la que demandan apoyo inmediato. Ante situaciones de vulnerabilidad grave, en las que la vida está en riesgo si no se recibe respaldo, los Estados de las sociedades modernas están organizados para apoyar en la emergencia. A este respecto, los desastres naturales solo se diferencian de otros riesgos, como las enfermedades graves o el despido del trabajo, en lo masivo del

fenómeno y, en algunos casos, en la pérdida de la infraestructura básica.

Por ello, si bien los desastres naturales pueden diferenciarse de otros problemas sociales, tienen muchos parecidos con la pobreza extrema, tales como la necesidad de enfrentar la situación con mucha rapidez, proveer servicios básicos y establecer condiciones socioeconómicas mínimas para que las familias puedan salir adelante. Tan claro es el parecido que miles de peruanos viven todos los días con carencias similares a las que hoy atraviesan los pueblos del sur chico y Huancavelica: viviendas inadecuadas; falta de agua, servicios de saneamiento y electricidad; centros de salud insuficientemente atendidos.

La lección evidente es que enfrentar los desastres naturales tiene más de una vinculación con las políticas sociales en las que se trabaja de manera continua, como la salud y la seguridad social. La diferencia evidente de la emergencia y la concentración del problema en una zona no debe hacer perder de vista esto.

Prevención, cuánta falta nos haces

Es claro que una política social y una política de desarrollo deben tener como una de sus orientaciones principales reducir los riesgos que pueden afectar seriamente la calidad de vida de las familias. Esta reducción de riesgos debe darse en dos sentidos: reduciendo la probabilidad de que el evento adverso ocurra y reduciendo la magnitud del impacto que ese evento implica. En el caso de las políticas de salud, por ejemplo, se busca reducir las enfermedades transmisibles, aplicar vacunas, reducir el consumo de tabaco y drogas, y promover la alimentación, higiene y cuidado del niño como medio para combatir la desnutrición. Es sabido que la prevención, además de evitar muchos problemas de salud, resulta a la larga costando menos que la curación.

Pero el Estado peruano, tanto con relación a la salud como frente a los desastres naturales, hace muy poco en prevención. Así como casi no se da información ni se educa a las madres para que sepan cómo alimentar y cuidar a sus niños pequeños, o a los jóvenes para que eviten el contagio de enfermedades de transmisión sexual usando preservativos, del mismo modo la mayoría de peruanos no conocemos los riesgos de construir nuestras viviendas en determinados suelos ni los métodos que tanto la Pontificia Universidad Católica del Perú como la Universidad Nacional de Ingeniería han desarrollado para reforzar viviendas de adobe a bajo costo con el fin de darles una resistencia sísmica mucho mayor.

Pero la información que tampoco se ha divulgado adecuadamente es qué hacer en caso de que el problema se presente. Esto es, desde luego, válido tanto para los terremotos como para diversos problemas de salud, en los cuales lo que se llama prevención secundaria es igualmente muy importante.

Lo que está ausente en la prevención no es solo la educación y la información, sino también la regulación.

Lo que está ausente en la prevención no es solo la educación y la información, sino también la regulación. En salud, se ha permitido que proliferen contratos de servicios no personales que carecen de seguridad social y que continúe una forma-

ción de médicos que no garantiza la calidad profesional de ellos. En urbanización y construcción, se permite que en suelos inadecuados y siguiendo métodos inseguros se edifiquen no solo viviendas sino inclusive colegios y edificios públicos!

Pasado el terremoto, además de la ayuda de emergencia y reconstrucción de la zona, la otra pregunta que debemos plantearnos es ¿qué estamos haciendo, individualmente, y qué está haciendo el Estado para reducir los riesgos frente al próximo terremoto –y frente al próximo Niño, huaico o sequía–? ¿Qué se va a hacer para difundir las opciones de construcción antisísmicas que ya se conocen? ¿Qué facilidades va a dar el gobierno para que las personas puedan adoptar fácilmente esos refuerzos en sus viviendas?

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento –hoy dirigido por Hernán Garrido-Lecca, antes por Carlos Bruce– se ha olvidado de este problema que afecta a la mayoría de los pobres del Perú, y sería bueno que considere que esto es una tarea prioritaria. Tanto o más importante que la construcción de edificios en Lima es evitar que, cuando haya un terremoto, las casas de las provincias se caigan por miles, con alto costo para la vida. Y se puede hacer.

El objetivo de la reconstrucción es la gente. La economía es únicamente uno de los medios

Tras el terremoto y la atención de emergencia, que aunque con excesiva tardanza ya está prácticamente resuelta, cabe ahora preocuparse por el restablecimiento de las condiciones básicas de vida en la zona.

Hay que insistir, al respecto, en el objetivo de este proceso: la calidad de vida de las personas. La reconstrucción de la infraestructura, de los servicios básicos, de los colegios y de las viviendas tiene ese sentido fundamental. Recordando, además, que lo esencial de un centro de salud o de un colegio no es que exista un edificio, sino que se brinde un buen servicio, con trabajadores y

profesionales de calidad y motivados; con las medicinas, textos y materiales necesarios y adecuados a las necesidades de la zona; con buena atención al público. Si hay que hacerlo de nuevo, hagámoslo bien y no repitamos los problemas del pasado.

Hoy hay quienes dicen que lo fundamental es que ese proceso se realice pensando en la economía de la zona. Casualmente, se trata de quienes tienen intereses empresariales en la región. Sin duda, está bien que una de las orientaciones de la nueva infraestructura sea esa, pero no se puede perder de vista que la economía es solo un medio, entre varios, para mejorar la calidad de vida de las personas. Más importantes que los puertos, los almacenes y las vías para que los espárragos puedan salir al exterior son los hospitales, los centros de salud y, como algo nuevo, los equipos de salud familiar y comunitaria; son los colegios, los institutos superiores y las universidades que otorguen una educación de calidad, con contenidos relevantes para la economía y la sociedad; son las facilidades para que los pequeños negocios puedan volver a prosperar y los agricultores de la zona reciban buenos precios por cultivos como el algodón, seriamente afectado por los enormes subsidios que Estados Unidos le da a este producto en su país, a pesar de que la propia Organización Mundial del Comercio lo ha declarado ilegales.

En esta orientación, vale recordar la propuesta que Francis Streeten hiciera veinte años atrás: primero lo primero, y lo primero son las necesidades básicas. La educación, la salud, el agua potable y saneamiento, la alimentación y la nutrición. Esa debe ser la prioridad de la reconstrucción.

La educación, la salud, el agua potable y saneamiento, la alimentación y la nutrición. Esa debe ser la prioridad de la reconstrucción.

Además, el poner el énfasis en la población y no en la economía, y sobre todo en aquellos sectores que sufren la peor parte de la situación, llama a no olvidar y a dar prioridad a los afectados en las zonas rurales y de la sierra, en Yauyos y Huancavelica, pero también en el mismo departamento de Ica. Mucha atención ha sido puesta en las grandes concentraciones urbanas –sobre todo en Pisco, donde el golpe ha sido mayor–, pero no podemos olvidar que en las zonas rurales es donde viven las familias que han estado en pobreza extrema desde hace muchos años, y que por lo tanto son las que tienen menos defensas para enfrentar un desastre como este.

Descentralización, participación y centralismo

El dilema: parece que las autoridades locales y regionales carecen de las capacidades para enfrentar los enormes retos de la reconstrucción. El asunto es que, a juzgar por su respuesta a la emergencia y su *performance* durante el primer año de gobierno, el gobierno central no está muy bien parado.

Alan García parece creer que las opciones de la democracia están cerradas, ya que no quiere confiar en organizaciones públicas ni en sus propios ministros ni en su propio partido ni en expertos independientes.

El gobierno aprista viene apostando a confiar en un actor en el que ya se ha apoyado mucho durante su primer año: los sectores de la gran empresa que han estado vinculados al fujimorismo. El liderazgo otorgado a Julio Favre y a José Chlimper es muy elocuente al respecto, aunque según algunas versiones esta decisión únicamente saca a la luz que esas relaciones eran estrechas desde hace tiempo. Alan García parece creer que las opciones de la

democracia están cerradas, ya que no quiere confiar en organizaciones públicas ni en sus propios ministros ni en su propio partido y sus dirigentes ni en expertos independientes ni en universidades nacionales ni en ONG, y ni siquiera en empresarios, de la construcción u otras áreas que sean emergentes o independientes políticamente. Solo en los empresarios fujimoristas.

Repite así, en este terreno, lo que parece suceder en la política nacional. El gobierno no ha buscado una relación de colaboración y respeto con los gobiernos regionales y municipalidades, sino una de desconfianza y enfrentamiento. Lo mismo ha sucedido con la sociedad civil.

Siendo indispensable un apoyo del gobierno central para la reconstrucción –tanto por la magnitud de los recur-

sos financieros requeridos como por la complejidad de la tarea–, esto mismo determina que pensar en una respuesta centralista, basada en actores que no tienen experiencia ni conocimientos especializados al respecto, no es lo más adecuado. Por el contrario, si el gobierno central quiere ganarse el liderazgo en la reconstrucción, debe hacerlo apoyando a los gobiernos regionales y municipalidades, facilitando su vinculación con expertos nacionales e internacionales, con empresas, con fuentes de financiamiento externas y con la sociedad civil del resto del país, que busca formas de hacer efectiva su solidaridad.

Los gobiernos regionales y las municipalidades deben tener un rol protagónico, ya que para ello la Constitución y las leyes les otorgan competencias –en muchos casos exclusivas– respecto a gran parte de los problemas puestos sobre el tapete con la reconstrucción. A ellos les compete medir el pulso y consultar a la población acerca de las opciones para su reubicación, de las propuestas para renovar la habilitación urbana y el ordenamiento territorial, de las mejores formas para restablecer los servicios de agua potable y saneamiento, etcétera.

Nada nuevo

En varios sentidos, nada de esto es nuevo. El terremoto solo resalta varios de los problemas y retos que tienen las políticas públicas, y en particular las políticas sociales, en el Perú. La pregunta es si la respuesta gubernamental está favoreciendo los cambios institucionales que se requieren, promoviendo mayor prevención, una visión más integral que considere lo social y no solo lo económico, una mayor participación de las personas. Las visiones que hasta el momento se vienen planteando desde el Fondo para la Reconstrucción Integral del Sur (FORSUR) más bien parecen reforzar y profundizar estos problemas. Ojalá que ello sea solamente una oportunidad perdida con relación al progreso institucional y al desarrollo nacional, y no afecte, además, la reconstrucción material y social de las regiones dañadas. ■